



**DECRETO N°. 026**  
**(17 DE MARZO DE 2020)**

**"POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en la Ley 9 de 1979, Ley 715 de 2001, Ley 1751 de 2015 y,

**CONSIDERANDO**

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 315, numeral 3 de la Constitución Política, el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, es deber del Alcalde y en general de toda la Administración Municipal servirle a la comunidad, garantizar la efectividad de sus derechos, velar por la protección de la vida y demás bienes de las personas y tomar las medidas pertinentes y eficaces para atender y superar las situaciones de desastres y emergencia que afectan las personas residentes en el Municipio.

Que de conformidad con el artículo 315, el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son atribuciones del Alcalde entre otras: "Conservar el orden público en el Municipio, de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. El Alcalde es la primera autoridad de policía del Municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo comandante."

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son fines sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades

Que igualmente el artículo 49 de la Carta Política preceptúa (...). *La atención de la salud y el saneamiento ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (...).*

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben "...obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud".

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho.



Que el artículo 10 ibidem enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho fundamental, los de propender por su autocuidado el de su familia y el de su comunidad y de actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas.

La Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del título VII resalta que corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud.

Que el parágrafo 1 del artículo 2.8.1.4.3 del decreto 780 de 2016, único reglamentario del sector salud y protección social establece que: "... sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de emergencias sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objeto de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada".

Que, en el mes de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud – OMS- informó sobre la ocurrencia de casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) causada por un brote de enfermedad por coronavirus COVID-19 en Wuhan (China).

Que según lo indica la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus que puedan causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Que el Coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que se estallara el brote de Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Que el día 30 de enero del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, ante la situación epidemiológica por el nuevo coronavirus, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional.

Que luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud de aumentar el nivel de riesgo en el mundo a muy alto y según los reportes de casos en la región de las Américas, el Ministerio de Salud cambió del nivel de riesgo medio a alto en Colombia.

Que el día 11 de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, ante la situación epidemiológica por el nuevo coronavirus, declaró la pandemia global.

Que como medida preventiva y en reacción a la declaratoria de pandemia del coronavirus (COVID-19) realizada por la OMS, así como la de emergencia sanitaria realizada mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante decreto 137 del 12 de marzo de 2020, se declaró la alerta amarilla en el Departamento de Cundinamarca.

Que aun cuando se han adoptado las acciones nacionales y departamentales requeridas para hacerle frente a esta situación de salud pública, se requiere fortalecer las mismas con el fin de prevenir un contagio generalizado y mitigar los efectos del COVID-19, en el momento que haga presencia en el Municipio.

Que el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012 establece que los Gobernadores y Alcaldes son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.





Que al tenor de lo dispuesto por el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que según el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, el Alcalde como Jefe de la Administración local representa al Sistema Nacional en el Municipio de Cárquez, siendo el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Que el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012, establece que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y habitantes, entre otras, para el manejo de desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Que el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012 establece que, los Gobernadores y Alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre.

Que, en virtud del artículo 58 de la Ley 1523 de 2012, se entiende por calamidad pública, "el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción".

Que, el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012, ordenó los criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública, para lo cual la autoridad política que la declare tendrá en consideración estos criterios.

Que, el artículo 60 de la Ley 1523 de 2012, prevé que, en virtud de la solidaridad, los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. La colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales, recursos físicos a través de redes esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementario del orden público, intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y, en general, todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado.

Que, el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, establece que declarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las Gobernaciones, y Alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones.



Que el seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria de desastre. Por las Secretarías de Gobierno y Desarrollo Institucional entidad o dependencia que haga sus veces, dentro del respectivo ente territorial, cuando se trate de declaratoria de calamidad pública, los resultados de este seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Que, el artículo 63 de la Ley 1523 de 2012, faculta al Gobernador o Alcalde para modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública, previo concepto del respectivo Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Que, el artículo 64 Ley 1523 de 2012, ordena que cuando se trate de declaratoria de situación de calamidad pública, previa recomendación del consejo territorial, el Gobernador o Alcalde, mediante decreto, declarará el retorno a la normalidad y dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad pública, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción y la participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias en las mismas.

El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública, en este caso, podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término, previo concepto favorable del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. El término comenzará a contarse a partir del día siguiente de la expedición del acto administrativo que declaró la situación de calamidad pública.

Que el artículo 65 de la Ley 1523 de 2012, establece que, declarada la situación de calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de la ley, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública.

Que el artículo 89 de la Ley 1523 de 2012, indica que los bienes de cualquier naturaleza donados a entidades públicas, privadas o comunitarias para atender una situación de desastre o calamidad pública declarada se destinarán conforme a lo dispuesto en el plan de acción específico.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres establece que para atender una calamidad pública los Municipios, Departamento o Distritos deberán realizar la evaluación de daños y necesidades EDAN.

Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de en el marco del protocolo para atención de emergencias implemento el RUD registro único de damnificados.

Que en el país se tiene confirmados 54 casos de COVID-19 al 16 de marzo del presente año, de los cuales 28 se presentan en el Distrito Capital y 1 en el Municipio de Subachoque Jurisdicción del Departamento de Cundinamarca, conforme lo establece el boletín de prensa de 071 de 2020 emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Que mediante Decreto No. 085 de 2017, se creó el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Cáqueza, Cundinamarca.





Que el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa reunión para analizar la situación presentada, emitió concepto favorable en sesión extraordinaria sobre la declaratoria de situación de calamidad Pública Municipal, según acta de fecha 16 de marzo de 2020, en la cual se evidencia que la decisión se tomó por unanimidad de los miembros asistentes a la sesión.

Que conforme a los artículos citados de la Ley 1523 de 2012, especialmente su artículo 65, el cual establece que declarada una situación de calamidad pública se aplica un régimen normativo especial que contempla disposiciones excepcionales en materia de contratos, control fiscal de recursos, adquisición y expropiación, ocupación temporal y demolición de inmuebles, imposición de servidumbres, solución de conflictos, moratoria o de refinanciación de deudas, incentivos de diverso orden para la rehabilitación, la reconstrucción y el Desarrollo, administración y destinación de donaciones y autorización, control, vigilancia e inversión de los bienes donados. También se dará aplicación por parte de las autoridades competentes a lo dispuesto en el tema del trámite aplicable a las importaciones de las donaciones destinadas a los damnificados de situaciones de Calamidad Pública. Entre otras medidas tendientes a superar o conjurar la situación de Calamidad Pública.

Que atendiendo el concepto favorable del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres se considera necesario adoptar medidas y acciones urgentes para prevenir los efectos del Coronavirus (COVID -19) con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del Municipio de Cárquez, Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto,

#### DECRETA:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar la situación de **CALAMIDAD PÚBLICA** en el Municipio de Cárquez, Cundinamarca, conforme a la parte considerativa del presente Decreto, para adelantar las acciones en fase de preparativos para la respuesta y recuperación frente al brote de enfermedad por coronavirus (COVID -19).

**PARÁGRAFO:** El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del coordinador realizará la evaluación de daños y necesidades EDAN y el registro único de damnificados RUD.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Conforme lo determina el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el apoyo de las diferentes Secretarías y dependencias del Municipio, en asocio con la ESE Hospital San Rafael de Cárquez, elaborarán el PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO para la respuesta y recuperación, que permita la atención de los efectos adversos que ocasione el ingreso del brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Colombia, el cual será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la presente declaratoria y sus modificaciones.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** El Plan de Acción Específico, integrará las acciones requeridas, las fuentes de recursos y las entidades responsables de su ejecución, para atender en sus diferentes fases de manera efectiva la emergencia de salud pública. Lo anterior en armonía con el concepto del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** El seguimiento y control del plan de acción específico estará a cargo de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional.



**ARTÍCULO TERCERO.** Será de aplicación en la Jurisdicción del Municipio de Cáqueza el régimen normativo especial para las situaciones de Calamidad Pública contemplado en los artículos 65 y siguientes de la Ley 1523 de 2012 y demás disposiciones concordantes.

**ARTÍCULO CUARTO.** Las entidades públicas y privadas integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con su naturaleza y desde sus ámbitos de competencia, deberán participar en la ejecución de las labores tendientes a dar una respuesta efectiva y afrontar las condiciones de la emergencia.

**ARTÍCULO QUINTO.** Para los efectos del presente Decreto se entenderán como personas damnificadas, aquellas que han sufrido grave daño directamente asociado al brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en jurisdicción del Municipio de Cáqueza, por afectación en su salud, o muerte de algún integrante del núcleo familiar. Las mismas deberán estar certificadas como tales por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el Registro Único de Damnificados.

**ARTÍCULO SEXTO.** Para los efectos del presente Decreto se entenderán como personas afectadas, aquellas que sufren efectos adversos indirectos o secundarios, asociados al brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la Jurisdicción del Municipio de Cáqueza, como deficiencias en la prestación de servicios públicos, en el normal desarrollo del comercio o en el trabajo, así como por aislamiento temporal de la población, entre otros. Son personas diferentes a los damnificados.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** De ser necesario la Administración Municipal realizará los traslados presupuestales necesarios para atender la Situación de Calamidad Pública.

**ARTÍCULO OCTAVO.** El Comando de Estación de Policía de Cáqueza deberá realizar acompañamiento a las autoridades sanitarias locales para la verificación del acatamiento de las medidas sanitarias preventivas establecidas en la Resolución 380 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y protección Social.

**ARTÍCULO NOVENO.** El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y por el término de seis (6) meses, prorrogables por el mismo término, una vez evaluado el respectivo Plan de Acción Específico y previo concepto favorable del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

**PARÁGRAFO.** Conforme al artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, el Alcalde, cumplido el término de seis (6) meses, decretará el retorno a la normalidad o en su defecto prorrogará hasta por el mismo término, la situación de Calamidad Pública, previo concepto favorable del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

**ARTÍCULO DÉCIMO:** Remitir copia del presente decreto, a las Secretarías de Despacho, dependencias y entidades municipales, para que adopten las medidas necesarias con el fin de garantizar la salud integral de los habitantes, el orden público y la realización de las actividades tendientes a mitigar, los efectos de la situación declarada en el presente decreto.

**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Cáqueza, a los Diecisiete (17) días del mes de marzo de 2020.

  
**JAIME HERNANDO CARRILLO VELÁSQUEZ**  
Alcalde Municipal